

do 71 señores representantes, declaró mayoría 40 votos.

Verificado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado:

Señor Serdio.	38	votos
„ Cisneros.	31	„
„ Luna.	1	„
En blanco.	1	„

Total. 71 votos

No habiendo obtenido ninguno de los candidatos votación reglamentaria, se procedió á nueva elección entre los señores Serdio y Cisneros, obteniéndose el resultado que sigue:

Señor Serdio.	34	votos
„ Cisneros.	31	„
En blanco.	2	„

Total. 67 votos

No habiendo resultado tampoco votación reglamentaria, quedó aplazado el asunto, y S. E. levantó la sesión.

Eran las 6 h. 40 m. p. m.

Por la redacción.

L. E. Gadea.

27a. sesión del lunes 29 de enero de 1906.

Presidida por el H. señor Miró Quesada

Sumario.—Se elige oficial primero de la secretaría de la H. Cámara durante la licencia concedida al titular señor Deglane, al señor Pedro F. de Serdio.—Continúa el debate relativo á la consulta del Poder Ejecutivo respecto á si los jueces destituidos tienen derecho á jubilación y cesantía.

Abierta á las 4 h. 50 p. m., fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se dió cuenta de los siguientes:

OFICIOS

Del señor Ministro de fomento, manifestando que su despacho ha decidido enviar á la ciudad de Andahuaylas un facultativo, provisto del respectivo botiquín, á fin de que combata las epidemias de tifoidea y de coqueluche, como lo ha solicitado el honorable señor Samanés.

Con conocimiento de dicho honorable señor, se mandó archivar.

De los señores secretarios del H.

Senado, avisando que ha sido aprobada la redacción de la ley que declara permanentes varias partidas en los ramos de gobierno, justicia, guerra y fomento.

Se mandó agregar á sus antecedentes.

PEDIDOS

El honorable señor **Apaza Rodríguez**.—Pido á V. E. que, con acuerdo de la H. Cámara, se pase un oficio al H. Senado invitándole á sesión de Congreso, á fin de resolver los asuntos que quedaron pendientes en la última sesión.

Consultada la H. Cámara, así lo acordó.

El H. señor **Boza**.—Se ha puesto en mi conocimiento el informe del ministro de la guerra dirigido á esta honorable Cámara, con motivo del pedido que formulé hace muchísimo tiempo sobre armamento.

Dice el señor Ministro que en cuanto al primer objeto del pedido (leyó) En efecto, Excmo. señor, el señor Ministro de guerra después de reiterados oficios remitió á esta cámara las cuentas del armamento, y precisamente fué en vista de esas cuentas que formulé el pedido á que en este momento me refiero.

Aparece de esas cuentas que se gastó en la artillería algo más de un millón de francos; yo demostré entonces, y lo repitió hoy, que aquella adquisición ha sido un desastre para el Perú, que aquella artillería no sirve absolutamente para nada; y que los cañones muchas veces cargados han tenido que ir con la munición dentro del ánima á componerse en la maestranza de Santa Catalina. No sirven ni siquiera para salvas de artillería. Esa es la verdad en cuanto á la artillería — esto ha sido demostrado en multitud de circunstancias y esto es lo que tuve ocasión de repetir en esta Cámara.

Con este motivo, yo que tuve las cuentas de aquel armamento y que sabía que se había invertido más de un millón de francos en él, pedí á V. E. que se dirigiese un oficio al señor Ministro de guerra para que abriera una información, con el objeto de que se supiera quien era el responsable de esa compra de armamento tan detestable que había sido adquirido con pleno conocimiento de causa; porque yo recuerdo que en esta H. Cámara hubo una discusión

en la cual se probó hasta la evidencia el mal sistema de artillería que se había adquirido.

Por consiguiente, reitero mi pedido anterior y pido á V. E. que se diga al Poder Ejecutivo que se abra una información para saber á quien corresponde la responsabilidad por la adquisición de ese armamento, por la pérdida enorme que ha sufrido el Estado, no solo en cuanto al millón de francos gastado, sino en cuanto al peligro que ha habido en tener una artillería que para nada sirve. Esto en cuanto á la primera parte del pedido.

En cuanto á la segunda parte, esto es, al sistema de artillería que se piensa adquirir yo tengo que insistir ampliamente; é insisto precisamente por el ejemplo á que acabo de referirme. Dice el señor Ministro de guerra que no se ha tomado resolución alguna al respecto y que hasta ahora sólo se han efectuado estudios y experiencias. Precisamente esas experiencias, Excmo. señor, conocidas hoy por todo el país, son las que han demostrado también cuanto se ha dicho ya en esta H. Cámara desde 4 ó 5 años: la excelencia de la artillería Canet sobre la Krupp; eso está plenamente probado en la República Argentina, en el Brasil, en Portugal y ha sido probado también en el Perú por medio de las experiencias á que se refiere el mismo señor Ministro de la guerra.

¿Hasta cuándo, Excmo. señor, vamos á estar esperando pruebas para convencernos de cuál es la artillería que debe preferirse? ¿Cree-mos acaso que los agentes de estas fábricas van á estar indefinidamente en el Perú, esperando que el Gobierno adopte una resolución?

¿No se ha probado que el cañón enviado por la casa Krupp, que debía creerse que era de los mejores que en su fábrica tenía, ha sido un verdadero desastre, y no se ha visto que el otro era un modelo de excelencia?

Debe, pues, adoptarse una resolución á fin de salir de estas dudas que, indudablemente, mortifican, puesto que pudiera creerse, como alguien ha dicho, que la adquisición de artillería estaba ligada en alguna manera al empréstito realizado.

Son todas estas razones que me mueven á pedir á V. E. que se reite-

re el oficio al señor Ministro de Guerra, tanto en el sentido de que abra una información sobre la artillería adquirida en el tiempo del señor Romaña, cuanto de la urgencia de adoptar una determinación respecto de la artillería que debe hoy adquirirse.

El señor **Presidente**.—Está en debate el pedido del H. señor Boza.

El señor **Chacaltana**.—Excmo. señor: No creo que haya inconveniente alguno para aceptar la primera parte del pedido del H. señor Boza, tanto más cuanto que aquella información, en mi concepto, es muy sencilla, porque los que han intervenido en la adquisición del armamento á que se refiere el H. señor Boza son indudablemente el señor Ministro de la Guerra de esa época, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, quizás el Presidente de la República, y los comisionados en el extranjero, á quienes se hizo el encargo de la adquisición de ese armamento. Así es que yo no creo que haya inconveniente alguno, repito, para que se abra una información, á fin de averiguar quienes son los responsables en la adquisición del armamento á que se ha referido Su Señoría.

Respecto al segundo punto, más bien me parece que no está en las atribuciones de la Cámara de Diputados determinar el momento preciso, la época en que el gobierno debe adquirir tal ó cual clase de armamento. Debe dejarse que el Ejecutivo examine detenidamente todo lo que se refiere al pedido, sin decir al Gobierno que inmediatamente proceda á adquirir ese armamento.

Yo creo que el pedido del honorable señor Boza, en esta segunda parte podría modificarse en el sentido de que se recomendara al Poder Ejecutivo que adquiriese el armamento de cuyos ensayos se ha tratado, con la mayor oportunidad posible; pero, no dándole el carácter de urgencia que el H. señor Boza le asigna, para que el Ejecutivo adopte inmediatamente una resolución.

El señor **Boza**.—Sustancialmente no difiere mi pedido en la fórmula que ha propuesto el honorable señor Chacaltana.

Yo no he dicho otra cosa, así es, que puede consultarse el pedido en la forma indicada por Su Señoría,

porque, repito, yo no he propuesto otra cosa.

Consultado el pedido en la forma indicada por el H. señor Chacaltana, se acordó pasar el oficio.

ORDEN DEL DIA

S. E. manifestó que debiendo repetirse la votación pendiente para proveer interinamente el puesto de oficial primero de la secretaría llamaba como escrutadores á los honorables señores Rubina y Ramírez Broussais.

Sufragaron setenta y seis señores representantes y se declaró mayoría cuarenta votos.

El escrutinio dió el siguiente resultado:

Señor Serdio.	41 votos
" Cisneros.	36 "

Total. 77 votos

S. E. manifestó que, haiendo resultado viciada la votación, se iba á repetir y suspendió la sesión por breves instantes á fin de que los señores representantes prepararan sus cédulas.

Continuando sufragaron 72 señores diputados y S. E. declaró por mayoría la reglamentaria.

Verificado el escrutinio se obtuvo el resultado que sigue:

Señor Serdio.	36 votos
" Cisneros.	34 "
En blanco.	2 "

No habiendo alcanzado ninguno de los candidatos la mayoría reglamentaria, S. E. previa lectura del artículo 30. del capítulo del reglamento sobre elecciones, indicó que se iba á proceder al sorteo y que sería designado aquel cuyo nombre quedase en el ánfora.

Llamado el honorable señor Boza para realizar el sorteo, sacó la cédula que correspondía al señor Cisneros y por consiguiente S. E. declaró designado para ocupar el empleo de oficial primero, durante la licencia concedida al titular señor Deglane, al señor Pedro F. de Serdio.

El señor **Presidente**.—Continúa el debate de la interpretación de la ley sobre jubilación y cesantía de los magistrados destituidos.

El señor **Grau**.—Excmo. Sr: Después de haber escuchado la rigurosa argumentación del h. sr. Arenas.

que sostuvo con lucimiento el dictamen de la comisión en mayoría; no obstante de haberlo yo suscrito, resolví no terciar en el debate, pero quebranté mi propósito, cuando oí extrañado de boca del h. sr, Revilla, el elogio de la ley de 1901., de esa ley tan inconsulta y peligrosa, de esa ley con la que si es cierto que se persiguió un fin laudable, cual fué separar algunos malos jueces de las provincias; también es cierto que es cruelmente exajerada y contiene prescripciones draconianas; por lo que se hace necesario reformarla, según el criterio de los principios jurídicos.

(El señor **Santa Gadea**.—Pido la palabra)

El orador (continuando)

En esa ley se ha desconocido el principio universal, no discutido ni discutible, relativo á que **no se puede condenar á nadie sin oírsele**. Se ha prescindido en ella del inalienable derecho de defensa; y, por último, se ha negado el recurso de revisión al acuerdo que toma la corte suprema. De manera que este acuerdo que se convierte en verdadera ejecutoria vá contra todo principio y contra todo derecho. ¡Esto es monstruoso!

Además, Excmo. Sr., con esta ley se ha minado el principio cardinal de la inamovilidad de los jueces y magistrados. La inamovilidad que es, Excmo Sr. la garantía más preciosa de la administración de justicia, á la que debe rodearse de todas las seguridades posibles.

Y aun después de haberse olvidado en la ley del sacratísimo derecho de la defensa; después de haberse negado el imprescindible recurso de apelación ó revisión y después de convertido en movable el cargo de magistrado y juez ¿se quiere hoy exajerar más la ley hasta convertirla en infame?

Sí Excmo. Sr. el derecho de jubilación y cesantía es un derecho adquirido q' no es posible arrebatárselo al juez ó magistrado separado en virtud de esta ley. Ley Excmo. Sr. odiosa, pero no es este el momento de q' me extienda sobre la bondad ó inmoralidad de esta ley: ya habrá oca cuando se ocupe la h. cámara de reformarla; ahora voy á concretarme al punto en debate.

Uno ha sido el argumento con que se ha sostenido toda la discusión en

contra del dictámen en mayoría y por tanto en defensa del de minoría.

Ese argumento es el mismo que contiene la endeble vista del fiscal interino de la Excelentísima Corte Suprema Sr Dr Calle; de la comisión en minoría de justicia el mismo que verbalmente sus miembros han repetido en el debate; y es que en virtud de la ley de 1850 no gozan de jubilación y cesantía los magistrados destituídos por sentencia de juez competente; y de hecho, los H. que componen la comisión en minoría, afirman que el acuerdo de la Excelentísima Corte Suprema, es sentencia de juez competente. Lo afirman, Excmo. Señor, pero no lo prueban, ni podrán probarlo jamás.

No hay juicio; y aunque es inútil que insista en este punto que tan bien delucidado ha quedado por el Sr Dr Arenas; sin embargo es conveniente que lo haga.

No hay juicio, porque no hay emplazamiento; no se le da al juez, cuya destitución se solicita el derecho de defensa, se le condena sin oírlo y algo más grave se le condena de una manera definitiva, sin darle el recurso de apelación ó revisión. ¿Cómo es posible, Excmo. señor, asimilar á un juicio este procedimiento sumarisimo? De ninguna manera señores. Ya la Excmo. Corte Suprema por órgano de su presidente, el dignísimo magistrado doctor Espinoza, declaró en circular: que este procedimiento no es un juicio y que, por consiguiente su resolución no es una sentencia. Y si no es una sentencia, no cae bajo lo dispuesto por el artículo segundo de la ley de 1850. En esta misma Excmo. Señor, en la que se quiere encontrar el argumento para combatir el derecho de jubilación y cesantía de los jueces destituídos, me fundo para sostener que esos magistrados no han perdido tal derecho. Ruego al Señor Secretario que lea el artículo 6o. de la ley en referencia.

El Señor Secretario Levó: Artículo 6o. El haber se dividirá en treinta partes para los empleados que se jubilen, ó para los que resulten cesantes por que suprima el empleo que sirvan ó por que convengan al servicio subrogarlos con otros, observándose la proporción siguiente: los que solo comprueben

El Sr. **Grau** (continuando).—Es suficiente H. señor. En esta última parte está la explicación legal de la doctrina que sostiene la Comisión en mayoría. En el caso de la consulta venida del Ejecutivo no es una sentencia que se aplica á un juez que ha delinquido; es una medida disciplinaria que toma la Corte Suprema, en sala plena, para separar ó subrogar á ese mal juez, que no ha cometido ningún delito; sino que, por simple falta de moralidad, se hace indispensable remover, para que no se perturbe la buena administración de justicia. Así es, pues, que esa disposición por la que gozan del derecho de cesantía, los funcionarios, de cualquier clase, cuando son subrogados, es la única que debemos invocar en el presente caso y nó lo prescrito en el artículo segundo.

Aquí, Excmo. señor, no hay juicio porque no hay controversia; y si no hay juicio no hay sentencia tampoco hay delito. Si no existe delito; no hay pena. La pena es la sanción que se impone al que infringe una ley y en este caso, sólo podría aplicarse, cuando la causal es el prevaricato; y aún el especialísimo caso de prevaricato, está castigado por nuestras leyes penales con la suspensión; que no trae consigo la pérdida de los derechos de jubilación y cesantía. Ahora, si al juez que no delinque, sino que simplemente incurre en faltas de moralidad se le aplica esta ley para separarlo del puesto, al juez que ha cometido verdadero delito al juez cohechado, al juez sobornado, á ese juez no se le puede aplicar esta ley y en ese caso resulta el absurdo y la injusticia que el juez que ha cometido simples faltas de moralidad está en la misma ó peor condición que el verdadero delincuente. No es posible, pues, Excmo. señor, fundarnos en esta ley para arrancar á los jueces y magistrados los derechos inalienables que han obtenido de jubilación y cesantía.

El señor **Marales**.—Pido la palabra.

El señor **Grau** (continuando).—Además, Excmo. señor, de este argumento, de que de hecho, sin pruebas, asimilan, los acuerdos de la corte suprema á una sentencia de juez competente para fundarse en el artículo

20. de la ley de 1850 se invoca un ejemplo, pero ese ejemplo no es pertinente y es por demás inverosímil. Sólo extremando las cosas, es posible concebir que un magistrado después de 30 años de servicios, para obtener derecho á la jubilación ó cesantía, voluntariamente se propusiera delinquir, deshonrándose él y en volviendo en su deshonra á toda su familia. Esto no es posible concebir, Excmo. señor, porque ya un magistrado que tiene los 30 años de servicios, estará, si no en los 70 años de edad, al menos muy cerca de ellos y entonces tendría la paciencia necesaria para aguardar dos ó tres años más á fin de acojerse á la disposición de la misma ley, ó si no tendría otro camino expedito: el de la enfermedad, porque á esa edad, el que no está enfermo es por una rara excepción. De tal manera, pues, Excmo. señor, que ese ejemplo por querer probar mucho no ha probado nada. Se han extremado demasiado las cosas; es lo mismo q' si se quisiera invocar el ejemplo de un operario que se dejara triturar un brazo ó una pierna en el engranaje de las máquinas de una fábrica para acojerse á la ley sobre indemnización del trabajo; quizá alguna vez pueda suceder esto por ignorancia en esta gente; pero en un magistrado que lleva 30 años de servicios honrados, no es posible concebirlo, Excmo. señor.

Ahora, refiriéndome al H. Sr. Revilla, quien para probar la teoría que sustentaba SSA., nos decía enfáticamente: sí; es un verdadero juicio el procedimiento especial de la novísima ley de 1901; pero no lo demostró, como no lo ha demostrado ninguno de los que sostienen tan curiosa tesis ni nunca podrán demostrarlo. E inturriendo en seguida en una contradicción flagrante; comienza desacreditando la prueba testimonial y acto continuo, califica el informe de la Corte Superior de "prueba plena". ¿Pero en qué se funda la Corte para emitir este informe? En esa prueba testimonial que el H. señor Revilla desacredita.

Además, si la Corte Superior, ó mejor dicho, si el dictamen de ese tribunal fuera prueba plena, la Excmo. Corte Suprema tendría siempre que acatar este informe y, por lo mismo, tendría que resolver de acuerdo con él; pero no pasa eso y ya sa-

bemos que hay ejemplos en que la Corte Superior unánimemente, Excmo. señor, ha dado informes favorables después de haber hecho todas las investigaciones y la Corte Suprema, á pesar del tal informe, ha destituido al juez; es decir, el mismo hecho de q' haya disparidad de opiniones, discrepancia de pareceres entre dos tribunales de la República demuestra que no hay prueba plena y que, es muy peligrosa esta ley.

Por último, Excmo. señor, creo convencidamente que aplicar el rigor que pretende darle la Comisión de justicia en minoría, á los jueces destituidas en virtud de la ley de 1901 sería pues, cometer una verdadera iniquidad; estos jueces han desempeñado muchos años sus tareas de magistrados con toda honorabilidad. Es posible que en un momento desgraciado hayan incurrido en algunos de los casos de la referida ley ó que no hayan incurrido; es posible que con ó sin razón justificativa, los magistrados se vean envueltos en uno de esos juicios y entonces no sólo se aplicaría la pena al juez inocente ó culpable sino que tendría trascendencia hasta á la familia, lo que no es justo y sí, odioso.

tas por ellos mismos.

Por estas consideraciones, Excmo. señor, creo que la H. Cámara debe, al votar este punto, darle el verdadero alcance de la consulta que estamos discutiendo, declarando que no pierdan sus derechos de cesantía y jubilación los jueces y magistrados destituidos en virtud de la ley de 1901, porque lo contrario sería sancionar una disposición que está en pugna, Excmo. señor, con la justicia y la equidad.

El señor **Santa Gadea**.—Excmo. señor: Si se fija bien la atención en la necesidad que informó la ley de destitución de jueces del año 1901, tiene que concluirse forzosa y necesariamente en que los que la dictaron no tuvieron en mente establecer ni aplicar pena alguna; sólo la cual pued traer la pérdida de los derechos de jubilación y cesantía.

Algunos de los señores diputados que han tomado parte en este debate, han discurrido bajo el concepto de que esa ley al prescribir la destitución del juez, establece la aplicación de una pena. Yo no lo creo así,

Excmo. señor; y no lo creo, porque aún cuando hubo la necesidad de establecer un procedimiento sumarisimo, abreviando todo cuanto se creyó posible los trámites del juicio criminal, no ha podido prescindirse de la citación y audiencia del acusado, de las diligencias indispensables para la probación de los hechos, de sentencia en forma, de los derechos del recurso de apelación y de los demás que el derecho procesal reconoce contra los fallos ilegales, injustos y defectuosos. Los legisladores de 1901, si quisieron imponer pena con la privación de aquellos goces, habrían conservado siempre y no lo habrían sacrificado del todo, aquel principio de garantía generalmente reconocido y observado, de que á nadie debe condenársele sin oírsele.

Véase también, Excmo. señor, y tan racionales son estas reflexiones, que aún en el caso de que se trate de imponer al juez incumplido algo menos grave que la destitución, por ejemplo, cuando se trata de la responsabilidad civil, el legislador se ha subordinado siempre á ese principio de garantía y salvador para el responsable, cual es el su citación y audiencia.

Así, nuestras leyes procesales establecen, como trámites del juicio de responsabilidad civil, los correspondientes al juicio ordinario de puro derecho: esto es, la demanda, la citación, la contestación, la réplica y la réplica, citación para sentencia, sentencia en forma, y los recursos de apelación con todos los consiguientes; y aún cuando es cierto que no establece la estación de prueba, no prescinde tampoco de la investigación necesaria, pues prescribe que forman parte integrante del proceso sobre responsabilidad civil los autos originales íntegros que le dieron origen.

Si estas consideraciones nos llevan al convencimiento de que la ley de 1901, con el procedimiento sumarísimo que establece, no ha tenido en mente imponer como pena la destitución, hay que examinar la cuestión bajo otro terreno, en el de la necesidad que informó esa ley; y veremos si así descubrimos la prescripción de la pérdida de los derechos de jubilación y cesantía.

Según mi modesto parecer, la cita-

da ley de 1901 tiene por objeto única y exclusivamente separar al juez, cuya permanencia en el cargo causa gravísimo daño á la Sociedad, con sus prevaricaciones, con su negligencia para el despacho, con sus actos inmorales y que así contribuye á la falta de una administración de justicia recta, imparcial y pronta y á la falta de decoro, de prestigio y de respetabilidad de la magistratura.

Si con la separación del juez queda satisfecha esa necesidad, la ley tiene que detenerse ante sólo la destitución, sin avanzar á la pérdida de los derechos de jubilación y cesantía, tanto por ser esto ya innecesario, cuanto porque es principio que debe restringirse lo odioso y ampliarse lo favorable y cuanto porque tiene que ser expresa la privación y pérdida de derechos, sin que nada autorice á imponerla simplemente por deducciones extensivas y más ó menos arbitrarias ó aventuradas.

Hay algo más, Excmo. señor: Los goces de jubilación y de cesantía no son simples beneficios, como el H. señor Velarde Alvarez trató de demostrarlo en la sesión del viernes, son verdaderos derechos en toda la extensión de la idea, tanto por los servicios que ha prestado el juez en el ejercicio de la magistratura, buenos ó malos, desde que la ley no distingue, cuanto también porque al abonárseles los sueldos por la tesorería fiscal, deja un tanto por ciento de esos sueldos y precisamente para que con dichos descuentos se atienda al servicio de la cédula respectiva que se le otorgue á la cesación del cargo; y de manera que al reclamar los goces de cesantía y jubilación el mismo juez ó su familia reclaman el montepío, lo que ya está empozado en caja, reclaman lo que les pertenece, lo que es suyo; y desde que al aplicarse la ley no hay declaración expresa de que pierden esa suma empozada; es claro que tienen derecho á ella y que no pierden los goces de cesantía y jubilación. En conclusión, pues, yo estoy de acuerdo con el dictamen en mayoría de la Comisión Principal de Justicia, y por consiguiente votaré en ese sentido.

El señor **Presidente**.—El H. señor Morales tiene la palabra.

El señor **Morales**.—Yo también pienso como parte de los honora-

representantes que acaban de hacer uso de la palabra; y aunque ellos han argüido ya todo género de razones para hacer suficiente luz en el debate de la H. Cámara, he de limitarme únicamente á aplicar, según mi criterio, las razones expuestas por ellos mismos.

Desde luego, Excmo. señor, tengo que extrañar y mucho que el H. señor Ministro de Justicia, al frente de dos leyes terminantes y suficientemente claras, haya sufrido un momento de vacilación sobre los derechos que corresponden á los jubilados y cesantes, con relación á los jueces que han sido destituidos por razón de faltas. Y no me explico cómo persona al parecer tan ilustrada en jurisprudencia, cómo la que está al frente del portafolio de Justicia haya incurrido en tan lamentable error.

La H. Comisión de Justicia, ó la Comisión de Justicia en minoría, opina porque los jueces que cometen faltas deben ser destituidos conforme á la ley de 1901, si mal no recuerdo, y arguye únicamente razones de pura moralidad.

Ante el tenor expreso de la ley de 1850 creo que estas razones de moralidad, que han venido después de esa ley, carecen completamente de fundamento. Y la razón porque carecen de fundamento es q' aquella ley de 1850 hablaba de derechos de jubilación y cesantía para los funcionarios judiciales que no solo fueran acreedores á la estimación general por el desempeño de sus cargos, sino por el hecho también de haber empozado el 4 por ciento de su renta en las arcas fiscales. Y esa renta empozada ya les daba los derechos de jubilación y cesantía, es claro que el Fisco, al entregarles esa cantidad en la forma de jubilación ó de cesantía, no cumple sino una obligación; y como entre la obligación y el derecho hay cierta correlatividad jurídica, parece cierto que los argumentos de la Comisión de Justicia en minoría caen por su base, son insostenibles ante los más elementales postulados jurídicos.

Yo encuentro, Excmo. señor, una palpable diferencia entre lo que es un acuerdo de Corte y lo que es una sentencia dictada por juez compe-

tente. Los acuerdos de Corte se concretan única y exclusivamente á las ritualidades del procedimiento administrativo, á la manera de ser policial del Poder Judicial. De modo que este orden administrativo no puede confundirse un acuerdo de Corte con lo que es una sentencia expedida por juez competente. ¿Qué es una sentencia expedida por juez competente, Excmo. señor? Es nada menos que el resultado final de un juicio, y el resultado final de un juicio es la **absolución de todas las pruebas**, la tramitación de todos los recursos que la ley permite, es el resultado de todas las estaciones sumariales, si se trata de un juicio sumario, ó de un procedimiento más lato, si se trata de un juicio ordinario; ocupándonos ahora de la ley que concede á un acuerdo de Corte la facultad de destituir á un juez que ha cometido una falta, parece, pues, que la ley de 1850 no puede ser aplicada á este caso de un modo concordante.

Las sentencias, señor Excmo., son la consecuencia, por decirlo así, de un argumento lógico. El argumento está constituido por la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, por todo el engranaje de las pruebas que la ley establece, y en seguida señor Excmo., por todos los demás recursos ordinarios y extraordinarios, para venir después con entera justificación, con entero convencimiento de lo que es la justicia y la realidad de los hechos, á expedir el juez ó la Corte su respectiva sentencia ó resolución.

El señor Revilla.—Pido la palabra.

El señor Morales (continuando).—Véase, pues, señor Excmo., como entre un acuerdo de Corte y una sentencia hay una notable diferencia; en el primer caso la ley de 1850 nos habla de sentencia dictada por juez competente; y en el segundo caso la ley de 1901 nos habla simplemente de acuerdo de Corte.

Algo más, señor Excmo., sobre este punto. Los dictámenes de los señores fiscales son apenas opiniones que pueden ser atendidos, en la medida de sus luces, por las Cortes ó jueces; pero nunca constituyen un veredicto sobre el asunto de que se trata. Yo estimo, en mucho, el dic-

tamen de ambos fiscales; pero creo, así mismo, que ellos ni aquí, ni en las Cortes, ni en ninguna institución judicial pueden tener más alcance que el de una información, inclinada por su objeto, á ilustrar la materia controvertida.

Como dice muy bien el H. señor Grau, en el acuerdo de la Corte para destituir á los jueces que han cometido falta, no hay ni siquiera los procedimientos, ni las ritualidades establecidas por nuestra ley adjetiva, para determinar una fórmula de juicio. Y no la hay, Excmo. señor, porque basta una simple información de la Corte Superior, no siquiera una prueba para que, si á la Corte Superior le agrada, dicta la destitución de ese juez, quizá inocente.

Y en presencia de esto ¿podrá el criterio aferarse á la idea de que un acuerdo de Corte sin proceso, sin fórmula de juicio, puede destituir á un funcionario judicial, quizá por una acusación quimérica? Yo niego, Excmo. señor, esto; y lo niego porque el mismo H. señor Grau, cuya aserción me merece sumo respeto, acaba de decirnos la manera, la forma violenta como algún tribunal ha procedido en la destitución de un juez.

Además, señor Excmo., yo considero que, desde el punto de vista jurídico, la duplicidad de la pena es un grave error en materia de penalidad y en materia de enjuiciamiento; yo no la concibo, ni en las legislaciones más adelantadas se ha establecido ese precepto. El hecho de que la ley de 1901 habla de faltas y no delitos, bien explica, señor Excmo., que ha preconizado la destitución, que parece que no es una pena secundaria, como opinan los señores de la minoría de la Comisión de Justicia. Si á los jueces destituidos que reclaman jubilación y cesantía se les quisiera castigar con una doble pena (porque si bien la separación es una pena, la falta del derecho de jubilación y cesantía constituiría tal vez una pena mayor) se habría consignado otro procedimiento en la ley de 1901.

Hay otro argumento, señor Excmo., que la Cámara debe tener en consideración. Creo que un funcionario que ha dedicado todos los años de su vida á la administra-

ción de justicia, cumpliendo austeramente con su deber y, tal vez, en un caso hipotético, en el último tercio de su vida es arrastrado por la influencia que siempre media en todo, ó por alguna circunstancia adversa se ve impelido por corrientes fatales á incurrir en un vicio; creo, repito, Excmo. señor, que ese individuo no es responsable, como mucho los otros no lo son tampoco, de sus actos, desde que en las simples ó meras faltas, por azón de vicios, no se encuentran los elementos sustanciales, constitutivos del delito. Y castigar una falta con doble pena, midiéndola en el cartabón de un delito, es un incalificable absurdo.

Así en este sentido considero yo que se viola uno de los preceptos fundamentales del derecho, al castigar de tal manera á esos individuos.

Por otra parte, esa misma duplicidad de la pena va contra los principios más elementales del procedimiento en materia penal. Parece excelentísimo señor, que nosotros viviéramos en un pueblo completamente desmoralizado en su poder judicial, cuando no sólo necesitamos de la destitución de los funcionarios, con el propósito de separarlos de la mala senda, sino que aún necesitamos quitarles la renta, á que tienen perfecto derecho por sus servicios anteriores, para hundirlos en la miseria y aumentar su desprestigio. Cuando sucede esto, hay que levantarse con enérgico esfuerzo, con el vigor del sentimiento herido y con el impulso de la honradez, á defender á esos jueces y magistrados destituidos, que indudablemente han cumplido con su deber durante un largo período de tiempo.

Volviendo, pues, al argumento, Excmo. señor, ¿puede creerse que un individuo que ha desempeñado correctamente sus funciones judiciales durante un largo período de tiempo, por una simple falta, que no se equipara indudablemente á un delito, pueda ser no solamente destituido, sino arrebatado de sus derechos de jubilación y cesantía? No, Excmo. señor, esto sería contrario á los más rudimentarios principios de justicia.

Y cabe aquí, Excmo. señor, hacer saltante una diferencia notable: la ley de 1850 nos habla únicamente de

delitos, mientras la ley de 1901 nos habla de faltas. ¿Cuál es la diferencia sustancial que existe entre un delito y una falta? ¿Puede una falta ser castigada en la misma proporción que el crimen, que el delito? ¿Puede á un delito aplicarse la pena que corresponde á la falta? No, Excmo. señor, los legisladores que dieron la ley de 1901 fueron suficientemente sabios; en su previsión estuvo esto que ahora mismo discutimos, Excmo. señor, porque esos legisladores, comprendiendo que la ley de 1850 estaba subsistente para los delitos de cohecho, prevaricato etc., pensaron en que no sólo por esas causas podía destituirse á los jueces y magistrados, sino también por faltas de moralidad, por negligencia habitual, por embriaguez ó por cualquiera otra de aquellas á que se refiere la ley que expidieron. Y sin embargo de esto, esos legisladores, con suma previsión, hicieron lo que la justicia habría hecho en todas partes del mundo; dijeron: ya que no están castigadas estas faltas, es menester castigarlas, y es preciso aplicarlas ¿qué pena? la de separación del puesto, porque la separación viene en este caso, como lo dije enantes, como una pena elemental, como el primer elemento de la pena, para castigar al funcionario que incurrió en falta.

Algo más, Excmo. señor; yo creo que en algunos casos se trata de una pena temporal al imponer la separación; por ejemplo, cuando se establece por causa de embriaguez, y el juez destituido vuelve sobre sus pasos, una vez regenerado, tiene expedito su derecho, para ir á recobrar su puesto y entrar de nuevo en el ejercicio de sus funciones. Y esto, Excmo. señor, no sólo es un argumento de justicia y moralidad, sino que tiene huella de autoridad en nuestra legislación: revísense los capítulos relativos á jubilación y cesantía, establecidos en el diccionario de legislación peruana de uno de nuestros más sabios jurisconsultos, el doctor don Francisco García Calderón, y entonces, todos y cada uno de los honorables señores que toman asiento en la H. Cámara, se convencerán, como estarán convencidos sin duda alguna, de que más de un funcionario judicial destituido, ha re-

cobrado esos derechos, que nosotros á propósito de una vaguedad, presentada por el señor Ministro de Justicia, vamos á quitarles, sin que puedan ser reclamados, en lo posterior, ni por sus sucesores.

El señor **Pancorbo** (interrumpiendo).—Pido la palabra.

El señor **Apaza Rodríguez**.—Pido la palabra.

El señor **Morales** (continuando).—Algo más, Excmo. señor, los derechos que reclaman los cesantes y jubilados en condición de jueces destituidos, son derechos adquiridos sobre los que no puede ir ningún poder del Estado. Así como nadie puede quitar los elementos de trabajo á los individuos que con ellos ganan su vida, los derechos de propiedad deben ser respetados.

A mérito de estos conceptos señor Excmo., yo me adhiero á las opiniones vertidas por la mayoría de la Comisión de Justicia, tan brillantemente defendida por el honorable señor Arenas, y por los señores que me han precedido en el uso de la palabra.

El señor **Velarde Alvarez**.—Excelentísimo señor: veo que el argumento propuesto en la sesión del viernes por el honorable señor diputado por Islay, ha tenido partidarios; pues los diputados por Huarás y Carabaya, honorables señores Santa Gadea y Morales acaban de repetirlo.

Dice el honorable diputado por Huarás que la jubilación y cesantía, son derechos que adquieren los funcionarios judiciales mediante el descuento de cuatro por ciento mensual á que está sujeto el haber que perciben.

Su señoría, así como los honorables señores Núñez y Morales han incurrido en una equivocación lamentable, por que el descuento del 4 por ciento que establece la ley de la materia se refiere, no á la jubilación y cesantía como su señorías creen sino al montepío.

El artículo 30. de esa ley es perfectamente claro y con su lectura queda probado que la jubilación y cesantía no son derechos que se adquieren con el descuento del 4 por ciento. La jubilación y cesantía son goces, beneficios, que bien podrían llamarse gratuitos, acordados por la ley á los empleados titulares, benefi-

cios que estos perciben en vida y que se traduce en renta mayor ó menor según sea mayor ó menor el número de años de servicio; mientras que el montepío viene á ser la asignación ó renta que el empleado propietario, cuya dotación anual llega á mil soles y tiene 6 años cumplidos de servicio, deja á sus deudos ó á parientes que le sobreviven, renta que es igual á la 5a. parte del sueldo íntegro. El montepío podíamos denominar beneficio enroso, porque es una especie de renta vitalicia, de operación comercial, en que el gobierno toma un descuento del pré del empleado y se obliga por este hecho á dar una pensión; el montepío es independiente de la buena ó mala conducta del empleado depende únicamente del descuento; lo que no ocurre con la jubilación que es inseparable del buen comportamiento del funcionario, porque no solo es premio, sino estímulo establecido por la ley en favor de los buenos servidores de la nación.

Si las pensiones de jubilación y cesantía se formarían como se forman las de montepío mediante el descuento del 4 por ciento con el de la otra cualquiera cantidad mensual, yo sería el primero en retirar mi firma del dictamen de la comisión de justicia en minoría, y estaría de acuerdo con mis honorables compañeros por Islay Huarás y Carabaya.

Creo, pues, haber desvanecido aquel cargo: la jubilación y cesantía no puede confundirse con el montepío; son beneficios ú opciones diferentes, que solo tienen de común la circunstancia de referirse todos á los empleados titulares; pero su índole es distinta y distintos los principios que los rigen.

El señor Núñez.—Pido la palabra.

El orador (continuando).—El descuento del cuatro por ciento mensual que se hace en el haber del empleado titular es, repito, para el montepío; ninguna relación tiene con la jubilación y cesantía. Algo más; los jubilados y cesantes están sujetos al descuento del 4 por ciento para montepío; así lo establece el artículo 9o. de la ley respectiva: de manera que el funcionario judicial aún encontrándose en la condición de jubilado ó cesante, sufre el tal descuento para montepío que es el único que

se les hace. No existe doble descuento; uno para jubilación y cesantía y otro para montepío.

El H. diputado por Islay nos hablaba de destituciones morosas y violentas; pero si hay algunas que pueden llamarse así, que lo dudo, constituirían excepciones, que por lo mismo nada prueban contra la regla ni menos contra la alta facultad concedida á la excelentísima corte suprema de justicia.

Nos decía también que la ley de 22 de setiembre de 1901 no podía tener efecto retroactivo. Yo no comprendo, Excmo. señor, como ha podido creer el honorable diputado por Islay que aplicando la ley de 1901 á los funcionarios judiciales nombrados con anterioridad se le hiciera producir efecto retroactivo. Esa ley q' ha sido dada con el objeto de procurar jueces dignos, dar lustre á la magistratura y tener una recta administración de justicia, tiene que aplicarse tan pronto como se presente la necesidad que le dió origen, tan pronto como se haga ostensible el obstáculo que con ella se trata de remover, sin fijarse en si los funcionarios judiciales fueron nombrados con anterioridad ó posterioridad á su promulgación.

Si fuéramos á juzgar con el criterio de su señoría tendríamos que concluir que la ley última que aumenta los emolumentos de los señores representantes á congreso no podrían aplicarse á los que actualmente desempeñan los cargos de diputados y senadores, sino á los que se elijan con posterioridad á la fecha de su promulgación.

Aunque se promulgue la ley de emolumentos no aprovecharía en concepto de su señoría, á los que en la actualidad estamos en la cámara, sino á los del tercio que se elegirá próximamente, porque nosotros hemos sido elegidos bajo el imperio de una ley que asigna emolumentos distintos, si bien menores. Me parece que el caso propuesto por mí no difiere del propuesto por su señoría, que se refiere á jueces que al ser nombrados no sabían que se les separaría del cargo por la excelentísima corte suprema, siguiendo un procedimiento rápido.

Nos decía también el honorable diputado por Islay, en la sesión del

viernes que la corte suprema jamás se reúne en la sala plena para pronunciar sentencia. Estoy de acuerdo con S.Sa. Antes de ahora no se reunía en sala plena para pronunciar sentencia, pero desde q' se promulgó la ley de 1901, puede hacerlo para destituir á los jueces y agentes fiscales, pues no hay inconveniente alguno para que la corte suprema se reúna en sala plena y pronuncie sentencia si así ordena una ley. Esto no es sino efecto de autorización. La ley es la que según la trascendencia de los actos judiciales distingue á estos en varias clases, les dá los nombres que le corresponden é indica el procedimiento que deben seguir los jueces. La corte suprema por otra parte según su organización y funciones, no pronuncia sentencia ordinariamente porque cabalmente está constituida para conocer del recurso extraordinario de nulidad que se interpone contra las sentencias expedidas por los jueces inferiores. Solo pronuncia sentencia, cuando ejerce funciones privativas, para las que se divide en tres salas, según lo estatuido en la ley de 8 de octubre de 1891.

La 1a. sala es la que expide sentencia;—tal pasa en las causas contra el presidente, vicepresidentes, ministros, etc. Repito que no encuentro dificultad para que por disposición de la ley la corte suprema reunida en sala plena pueda pronunciar sentencia.

El honorable diputado por Cotabambas, doctor Grau haciendo referencia á la circular del presidente de la corte suprema, doctor Espinosa, decía que no era juicio el procedimiento que se sigue ante la corte suprema para destituir á los jueces, porque así se manifiesta en dicha circular. Esta se expidió, Excmo. señor por el presidente de la corte suprema no con el objeto de interpretar la ley de 1901 que no es atribución del supremo tribunal sino con el de uniformar los procedimientos varios de las distintas cortes superiores de la república. Como las cortes superiores al intervenir en el procedimiento para la destitución procedían de una manera diversa se vió obligada la corte suprema á dirigir una circular indicando el procedimiento que debían observar y manifestando que la sumaria información de que

se ocupa la ley de 1901 no importaba juicio.

Me veo obligado, muy á mi pesar, á insistir en lo que dije en la sesión del viernes respecto al caso propuesto por el honorable señor Jiménez y tengo que insistir porque la aseveración de su señoría ha hecho eco en el ánimo de algunos señores representantes algunos de los que creen que estando ya resuelto el asunto no hay para que ocuparse de él. Nos decía el honorable diputado por Yungay que conforme á lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento de tribunales las cortes superiores pueden destituir por unanimidad de votos á los relatores, secretarios de cámara y procuradores cuando no correspondan á la confianza pública y nos presentaba el caso: de un secretario de cámara de la corte superior de Lima, destituido ó removido con arreglo á ese artículo; secretario que se presentó después ante el poder ejecutivo solicitando pensión de jubilación, pensión que se le otorgó.

Al respecto, Excmo. señor, ya he manifestado que el caso no es pertinente; en primer lugar, porque esa remoción fué hecha conforme al reglamento de tribunales y lo que tratamos en la actualidad de aclarar ó de interpretar es la ley de 1901, que es posterior al reglamento citado, que ha suscitado dudas en el ejecutivo y que divide las opiniones en el seno de esta honorable cámara.

En segundo lugar, dije la vez pasada, y repito ahora, que el caso no es pertinente por la circunstancia de que los secretarios y relatores, no son funcionarios judiciales y por que ese precedente se puede invocar por el interesado ante el gobierno, á fin de que este no le deniegue la gracia concedida á otros en igualdad de circunstancias, pero no ante el congreso, para enervar su facultad constitucional—de interpretar la ley—El caso á que ha hecho referencia su señoría el honorable diputado por Yungay, tan no constituye precedente, que el ejecutivo que pudo acogerse á él, cuando los exjueces de Andahuaylas y Huará solicitaron jubilación, no lo ha considerado así y pide que el congreso señale el alcance de la ley de 1901.

El honorable diputado por Cotabambas nos decía, fundándose en el artículo 60. de la ley de 1850, que

había una clase de empleados q' podrían llamarse subrogados y que en esa condición se encuentran los jueces destituidos por la corte suprema.

No conozco, Excmo. señor, ley ninguna que establezca esta tercera categoría de empleados que sin prestar servicio activo tengan derecho á una renta, llámese esta jubilación ó cesantía. Las leyes de 1850 y de 1901, se ocupan de los jubilados y cesantes; llama jubilados á los empleados que por una edad avanzada ó que por incapacidad física ó mental se inhabilitan para continuar ejerciendo las funciones de su cargo y cesantes á los que quedan sin empleo por haberse suprimido el cargo ó sido subrogados con otros porque convenga así al mejor servicio público. Según esto; hay dos caminos para llegar á la cesantía, por la supresión del empleo ó cargo y por la subrogación; los primeros se llaman jubilados y los segundos cesantes; pero no hay funcionarios que la ley los distinga con el nombre de subrogados.

El señor Yépez.—Pido la palabra.

El señor Velarde Alvarez.—(continuando.—y no puede haber funcionarios judiciales subrogados, Excmo. señor, por la circunstancia de que los funcionarios judiciales no sólo son titulares, sino que están protegidos por el principio de la inamovilidad; de manera que son jubilados ó cesantes, esto último cuando se suprime el cargo, pero no cuando sean reemplazados por otros, por convenir al servicio, porque la subrogación solo cabe en lo administrativo y con empleos movibles.

Los jueces, como funcionarios judiciales no pueden pues, ser subrogados y mucho menos por un poder distinto, porque la facultad de subrogar presupone la de nombrar.

Hay que tener en cuenta que la ley de 1901 sólo habla de jueces destituidos pero no de subrogados.

El señor Presidente.—Siendo la hora avanzada y habiendo solicitado la palabra varios honorables diputados, continuará el debate el día de mañana.

Se levanta la sesión.

Erán las 6 h. 25 m. p. m.

Por la redacción

Carlos Aureo Velarde

28a. sesión del martes 30 de enero de 1906

Presidida por el H. Sr. Rubina

SUMARIO.—Se aprueba el dictamen de la comisión auxiliar de presupuesto recaído en el departamental de Apurímac, con excepción de las partidas para médicos titulares.—Se aprueba el dictamen de la misma comisión en el departamento de Ica.—Continúa el debate de la consulta del poder ejecutivo sobre si los magistrados destituidos tienen opción á los goces de jubilación y montepío.

Abierta la sesión á las 5 h. p. m., se leyó y aprobó el acta de la anterior.

PEDIDOS

El señor Luna Luis F.

Excmo. señor:

Un diario, el más avanzado, el más culto de la república, en su segunda edición de la tarde, ha publicado un vasto telegrama de su corresponsal en Puno, dando á conocer la realización de un mitin popular en esa ciudad, tendente á menoscar la dignidad, la majestad y los derechos soberanos del congreso, á mérito de la ley que acaba de sancionar relativa á los emolumentos de los representantes.

Apenas puede concebirse, Excmo. señor, cómo en medio del concierto de paz, de trabajo y de bienandanza porque surca la república, pueda haber no un pueblo sino un grupo de individuos sin orientación política, que, audaces rasguen la magestad del parlamento, lanzando la semilla de la subversión, instigando la idea de disolver la más alta de las instituciones republicanas, la base más incommovible de la democracia y del resurgimiento nacional.

Bien sabe la honorable cámara que los actos plebiscitarios están condenados y penados por la constitución y leyes especiales, porque jamás en ningún país del mundo puede sobreponerse la movediza opinión de las muchedumbres, á las deliberaciones del congreso.

Por esto, Excmo. señor, quiero dejar constancia de que ese invento de mitin y de protestas no son, ni pueden ser eco del departamento de Puno, de ese pueblo liberal y altruista que siempre marchó á la vanguar-